

V NIVEL INSTRUMENTAL

Este apartado comprende todos aquellos instrumentos que permiten fundamentar, ejecutar y evaluar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tehuixtla, sean éstos jurídicos, financieros, administrativos o de cualquier otro carácter. No todos ellos existen actualmente, por lo que será necesario formularlos en el futuro inmediato, de acuerdo a las necesidades y posibilidades del Ayuntamiento, con apoyo del gobierno estatal, o federal, en su caso.

En cuanto a las líneas instrumentales generales, se presentan en primer término una serie de instrumentos cuya operación corresponde a la instancia municipal y del centro de población, los cuales, se han clasificado en:

- Instrumentos de operación administrativa;
- Instrumentos para la obtención de recursos programáticos;
- Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones del sector público;
- Instrumentos para la concurrencia y concertación de acciones e inversiones con el sector privado y social;
- Instrumentos para la participación ciudadana; e
- Instrumentos derivados del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

1. INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Estos se definen, en el ámbito del Programa de Centro de Población, como aquéllos instrumentos que tienen como propósito el conformar o, en su caso, adecuar la estructura o las funciones de los órganos del gobierno estatal y municipal en los aspectos del desarrollo urbano, de acuerdo a sus ámbitos de competencia.

A su vez se desagregan en:

1.1. Instrumentos para la elaboración, sanción, seguimiento, evaluación y actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

Entre los instrumentos principales cabe citar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, creada a iniciativa del Ejecutivo Estatal mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 29 de septiembre del 2000, en la cual se establece que a la citada Secretaría corresponde, dentro de otras funciones:

I.- Proponer e instrumentar la política de fomento y promoción del desarrollo urbano y vivienda en el ámbito de competencia del estado;

II.- Elaborar el programa de fomento y promoción de las actividades de desarrollo urbano, vivienda y comunicaciones y transportes de la entidad, así como dirigir, coordinar y controlar su instrumentación;

IV.- Promover la participación de los sectores social y privado de la entidad, en la instrumentación de los programas de su competencia, así como inducir el establecimiento de compromisos en actividades conjuntas o con la participación exclusiva de éstos;

VI.- Autorizar la expedición de permisos, licencias y autorizaciones para el establecimiento de fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.- Compatibilizar los Programas Estatales de Desarrollo Urbano con las políticas federales de descentralización y desconcentración que se propongan, así como proyectar la participación que corresponda al Gobierno Federal y los Ayuntamientos en el desarrollo de las zonas urbanas prioritarias;

XIV.- Asesorar y dar asistencia técnica al Ejecutivo y a los ayuntamientos en las materias que son de su competencia;

XVIII- Asesorar al Gobierno del Estado en la elaboración de convenios que celebre con la Federación y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia;

XIX.- Proyectar, Ejecutar, mantener y realizar las obras en materia de infraestructura educativa y de salud conforme a la normatividad aplicables

XX- Las demás que señalen las disposiciones jurídicas o le delegue el titular del Ejecutivo por mandato específico.

Por otro lado, la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Morelos, identifica al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Esta Ley señala en su Art. VIII.- El Gobernador del estado tendrá las siguientes atribuciones:

IV.- Integrar e Instalar el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, como órgano asesor auxiliar de los sectores publico, social y privado.

Dicho Consejo es presidido por el Gobernador del Estado y el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien funge como Secretario Técnico de la misma.

El Consejo tiene dentro de otras, las siguientes funciones:

1. Ser órgano auxiliar en el proceso de planeación del desarrollo urbano de acuerdo con los fines de la Ley.
2. Apoyar la formulación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano.
3. Recomendar la construcción de obras de infraestructura, comunicaciones y servicios públicos para el desarrollo de nuevos centros de población.
4. Sugerir propuestas para ordenar y regular las Zonas Conurbadas Intermunicipales e Interestatales.
5. Ser conducto para dar a conocer las proposiciones y observaciones que haga la comunidad organizada respecto del desarrollo Urbano.
6. Proponer modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano y sugerir la formulación de otros, que respondan a las necesidades y aspiraciones de la comunidad y elaborar su reglamento interno y someterlo a consideración del Ejecutivo.

Como parte de la estructura de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y del propio Gobierno del Estado, participa también la Comisión Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales, explícita en el Artículo 228 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos.

Así mismo, la misma Ley en su Art. XVI, señala a los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano como los órganos encargados de la planeación y promoción del desarrollo urbano dentro de los límites de las jurisdicciones territoriales correspondientes. Sus funciones son similares a las del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.

Los Ayuntamientos tienen también una participación activa y fundamental en la materia, ya que además de las atribuciones que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere y el correspondiente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Artículo 10 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos les señala las siguientes atribuciones:

- I.- Participar en la formulación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, en los términos de la presente Ley;
- II.- Formular, revisar, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éstos se deriven, su zonificación correspondiente, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
- III.- Enviar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven para que emita el dictamen de congruencia; una vez aprobados por el Ayuntamiento, el Gobernador del Estado ordenará su publicación y registro, así como su difusión.

En caso de no ser favorable el dictamen, se regresará al Ayuntamiento para las adecuaciones que corresponda;

IV.- Regular y controlar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población, así como vigilar que no se lleven a cabo acciones de urbanización que no estén previstas en los programas de desarrollo urbano legalmente aprobados o que contravengan las disposiciones de la presente Ley;

V.- Participar directamente o a través de mecanismos de coordinación con la Federación o el Gobierno del Estado, en la constitución y administración de reservas territoriales para el desarrollo habitacional, industrial, comercial, de servicios, así como para la protección ecológica, el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VI.- Administrar la zonificación prevista en los programas de desarrollo urbano correspondientes a su jurisdicción territorial;

VII.- Promover y realizar acciones e inversiones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de los centros de población ubicados en el territorio municipal, de conformidad con los programas de desarrollo urbano aplicables;

VIII.- Proponer la fundación de centros de población;

IX.- Participar, en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la presente Ley y los convenios de coordinación para reconocer las zonas con-urbanas, en la planeación, ordenación y regulación de las zonas con-urbanas, dentro de su jurisdicción territorial;

X.- Celebrar con la Federación, el Gobierno del Estado, con otros Municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos, prioridades y finalidades previstos y propuestos en los programas de desarrollo urbano que se ejecuten o realicen en su Municipio, conforme a la legislación vigente;

XI.- Proponer a la Legislatura del Estado, por conducto del Ejecutivo o en forma directa, la fundación de centros de población dentro de los límites de su jurisdicción, promoviendo en su caso los correspondientes centros de trabajo;

XII.- Proveer y auxiliar al cumplimiento y ejecución de los Programas Nacional y Estatal de Desarrollo Urbano, en lo que al Ayuntamiento compete;

XIII.- Fomentar la participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y actualización de los programas de desarrollo urbano en su jurisdicción territorial;

XIV.- Establecer las instancias que aseguren la consulta permanente del contenido, disposiciones y cobros en la regulación y aplicación de los programas de desarrollo urbano, con el fin de facilitar y agilizar las gestiones de los particulares;

XV.- Otorgar, negar o condicionar las autorizaciones, licencias y constancias de su competencia, de acuerdo con esta Ley, los programas de desarrollo urbano y demás disposiciones en vigor;

XVI.- Informar al H. Congreso, sobre otro tipo de autorizaciones que contravengan las disposiciones establecidas en los programas municipales de desarrollo urbano

y los que de éstos se deriven, para que dictamine y determine la sanción correspondiente;

XVII.- Participar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en forma coordinada con autoridades Federales y Estatales, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los programas de desarrollo urbano y la zonificación correspondiente;

XVIII.- Participar en la creación y administración de áreas naturales protegidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIX.- Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas o de los programas de desarrollo urbano, en términos de la legislación local;

XX.- Tramitar y resolver el recurso administrativo de su competencia, previsto en esta Ley;

XXI.- Expedir autorizaciones sobre licencias de construcción, de conformidad con las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano;

XXII.- Expedir las autorizaciones de licencias o permisos de uso del suelo, fusiones, divisiones, modificaciones, fraccionamiento de terrenos, régimen en condominio y conjuntos urbanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano, informando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en su carácter de dependencia normativa;

XXIII.- En los términos de la presente Ley y demás normas aplicables, para efectos del Artículo anterior, el Municipio deberá convenir con el Gobierno del Estado los mecanismos a través de los cuales se expedirán dichas autorizaciones o licencias;

XXIV.- A través de los programas de desarrollo urbano proponer las acciones para determinar los usos, destinos, reservas y provisiones del suelo, dentro de su jurisdicción municipal;

XXV.- En los mismos términos del Artículo anterior, determinar la zonificación primaria y secundaria, así como sus correspondientes normas técnicas;

XXVI.- Convenir con el Ejecutivo del Estado para que éste asuma funciones y o servicios de competencia municipal;

XXVII.- Sujetarse a las resoluciones del H. Congreso para que el Gobierno del Estado asuma funciones y /o servicios de competencia municipal;

XXVIII.- Realizar, a través de las autoridades competentes para el caso, con cargo a los promotores de los desarrollos autorizados, las obras que éstos omitan y que debieron de haber realizado de conformidad con la autorización otorgada y la fianza correspondiente;

XXIX.- Ejecutar por sí, o a través de las autoridades competentes, las demoliciones o modificaciones de obra con cargo a los promotores o particulares, cuando se contravengan las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano; y

XXX.- Las demás que les otorguen la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

1.2. Instrumentos para la Administración, Ordenación y Regulación del Suelo Urbano y la Constitución de Reservas Territoriales.

Estos instrumentos tienen como propósito regular y ordenar la utilización, uso y disposición del suelo en los centros de población; entre éstos destacan aquéllos que posibilitan la acción del estado para incidir en la regulación del mercado de terrenos.

Considerando lo anterior, por iniciativa del Titular del Ejecutivo, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 8 de febrero de 1995, se crea al organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

La Comisión Estatal de Reservas Territoriales cuenta con las siguientes atribuciones:

I.- Adquirir, enajenar, arrendar, afectar en fideicomiso, permutar y en general realizar cualquier acto jurídico destinado a la constitución de Reservas Territoriales y la regulación de la tierra, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano Estatal, y los que de éste deriven, así como para la ejecución de los planes y Programas de Desarrollo Integral, cuidando en todo caso el Medio Ambiente y las Reservas Ecológicas del Estado.

II.- Ejecutar la Enajenación del Suelo a Personas físicas o morales, en congruencia con el programa de Desarrollo Urbano que corresponda y con estricto apego a las Leyes y Reglamentos sobre la materia;

III.- Realizar el inventario del Patrimonio Territorial Libre de Edificaciones, del Gobierno Estatal y coadyuvar, en su caso, con el Gobierno Federal, a fin de concretar los trámites que se requieran para protocolizar el traslado, a favor de la Comisión, del suelo que corresponda;

IV.- Coadyuvar en la Política Estatal en materia de Planeación Urbana, así como en el aprovechamiento y destino de los Recursos Territoriales del Estado;

V.- Analizar los planteamientos de Usos y Reservas del Suelo contenidos en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano con objeto de realizar los estudios de delimitación y tenencia, que establezcan las Reservas Territoriales;

VI.- Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Acuerdos de Coordinación con la Federación para la adquisición o constitución de Reservas Territoriales para Desarrollo Urbano y Vivienda;

VII.- Realizar negociaciones con los poseedores o propietarios del Suelo Urbano en las Reservas Territoriales previstas en los Programas de Desarrollo Urbano Estatal y Municipales, así como realizar los actos

jurídicos o administrativos que aseguren el destino previsto para dichas reservas;

VIII.- Fomentar la constitución de Inmobiliarias Sociales en las áreas de reserva o regularización que incorporen al sector social al Desarrollo Inmobiliario;

IX.- Realizar las gestiones de orden financiero o administrativo que apoyen los programas que incidan en la Utilización del Suelo de la Reserva Territorial;

X.- Celebrar Convenios de Coordinación entre los Municipios y de éstos con el Gobierno del Estado y la Federación, así como con entidades públicas y en su caso privadas, con el propósito de apoyar las actividades y acciones que involucren programas de la Comisión en materia de Reservas Territoriales, en su generación, Administración, promoción y la gestión, procuración y seguimiento de la Regularización de la Tenencia de la Tierra para la prevención, reordenación y control del crecimiento urbano;

XI.- Celebrar con inversionistas los contratos que correspondan para la transferencia de Reservas Territoriales de acuerdo al Uso del Suelo que se apruebe, previa autorización del Congreso del Estado.

XII.- Vigilar el cumplimiento de los contratos de transferencia de Reserva Territorial y en caso de incumplimiento, promover las acciones correspondientes para obtener la restitución de los inmuebles materia de esas operaciones;

XIII.- Notificar a las autoridades correspondientes las contravenciones al Uso del Suelo y evaluar su impacto en los Programas de Desarrollo;

XIV.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

2. INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROGRAMÁTICOS.

Los recursos o ingresos de los diferentes niveles del Gobierno del estado se pueden clasificar en dos grupos, atendiendo a su origen:

Ingresos de derecho público o Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios.

Los primeros son aquéllos que percibe el Gobierno del estado, o los municipios, de carácter obligatorio a cargo de los particulares para cubrir los pagos públicos. Estos ingresos provienen de su facultad económico - coactiva impositiva y son los impuestos, derechos, contribuciones especiales y aprovechamientos.

Los impuestos son ingresos de derecho público que el estado fija a cargo de los particulares de modo impersonal, general y obligatorio. Los derechos son contraprestaciones que el estado establece a cargo de los particulares por la prestación determinada y cuantificable de servicios públicos.

Las contribuciones especiales son una figura tributaria, con carácter de derecho público, que se sitúa entre las dos figuras descritas anteriormente, pues si bien no es posible determinar o cuantificar de modo específico o singular los beneficios al particular, tampoco tienen una naturaleza general e impersonal como los impuestos. Son créditos fiscales que generalmente el estado impone a los particulares beneficiados por la ejecución de actos y obras públicas que se traducen en cargas fiscales por el aumento de plusvalía o beneficio de zonas aledañas en donde el estado ejecutó obras o actos públicos.

El último de los ingresos de derecho público o tributarios son aquéllos que no pueden ser clasificados como impuestos, derechos o contribuciones especiales, y que son los que percibe el estado por medio de recargos, multas, sanciones, moras, etcétera.

Los otros ingresos del estado y de los ayuntamientos clasificados como no tributarios, y que la ley define como producto, son los que se derivan de la actuación de la administración pública como agente privado en la vida económica. Son aquéllos que obtienen los organismos, empresas o fideicomisos estatales en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

Es conveniente anotar que el estado participa de las aportaciones del impuesto sobre la renta, cuyo objeto es gravar las utilidades del particular derivadas de su actividad económica. En materia urbana, la actividad más relevante, por la que se grava con este impuesto, es la enajenación y el arrendamiento de inmuebles.

En el ámbito estatal, se cuenta con el impuesto predial, cuyo objeto es gravar la propiedad o posesión de predios rústicos o urbanos. En el ámbito general, son sujetos de dicho impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles, y la base del impuesto es el valor catastral, obtenido mediante los métodos de valuación y aplicación de leyes fiscales.

Una de las características relevantes del impuesto predial, la de ser un impuesto al patrimonio, es tal vez su principal limitante para convertirse en un instrumento de política de desarrollo urbano. La abstracción impositiva sobre la capacidad de pago de los sujetos del gravamen impide, por ejemplo, la utilización del tributo como instrumento del desarrollo urbano.

En lo general, el impuesto predial ha sido considerado como un impuesto regresivo, en virtud de que como impuesto que aumenta su tarifa en relación directa a la cantidad y calidad de las construcciones incorporadas al suelo, produce limitaciones al uso intensivo del suelo. Con lo anterior el propietario o poseedor se encuentra ante la disyuntiva de mantener el suelo sin construcción y esperar los resultados de su especulación o incorporarle construcciones que le van a originar un pago mayor de impuesto.

A diferencia del impuesto predial, el impuesto a la traslación de dominio atiende no sólo al aspecto patrimonial, sino a las condiciones especiales de determinados sujetos jurídicos; esto le permite servir de instrumento eficaz en la consecución de determinados objetivos de política de desarrollo urbano.

3. INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN DE ACCIONES E INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

Uno de los principales instrumentos que se clasifican dentro de este apartado es el Convenio de Desarrollo Social que se celebra entre la Federación y el Gobierno del Estado de Morelos, que sustituye al anterior Convenio Único de Desarrollo y en primera instancia al Convenio Único de Coordinación.

El Convenio de Desarrollo Social tiene su fundamento en los Artículos 25, 26, 105, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 22 de la Ley de la Administración Pública Federal; Artículos 33, 34, 36, 38, 39 y 44 de la Ley de Planeación; en su caso, lo que al efecto establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación; Artículo 70, fracciones XIII y XXVI y Artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y Artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley Estatal de Planeación.

El Convenio de Desarrollo Social persigue los siguientes objetivos:

- Coordinar la ejecución de acciones, así como la aplicación de recursos para la realización de obras y proyectos a fin de impulsar el desarrollo en la entidad y en sus municipios;
- Fortalecer el sistema federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculando los esfuerzos que realicen los tres niveles de gobierno en el combate a la pobreza, mediante la descentralización de funciones;

- Fortalecer los mecanismos de participación social en la ejecución y vigilancia de programas concertados con los sectores social y privado;
- Vincular las acciones de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con la planeación estatal de desarrollo, a fin de que las acciones que se realicen sean congruentes y permitan la equidad y permanencia en el desarrollo nacional;
- Fortalecer a los municipios en la aplicación y ejercicio de las facultades que les otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Impulsar la creciente participación de los municipios, como eje de desarrollo social y económico, para la atención de obras, proyectos y actividades prioritarias que decidan el propio gobierno municipal y sus comunidades;
- Impulsar la participación concertada y corresponsable de los grupos sociales en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, preservación de los recursos naturales, equipamiento urbano, producción, distribución, comercialización y abasto de alimentos, asentamientos humanos, agua potable, electrificación, desarrollo rural e infraestructura agropecuaria;
- Coordinar acciones con el propósito de difundir los beneficios y oportunidades de los Tratados de Libre Comercio; y
- Establecer las medidas necesarias para apoyar a los sectores social y privado, a efecto de que se adecuen al entorno competitivo y se pueda alcanzar un desarrollo regional sostenible.

El financiamiento de los programas se instrumenta bajo los conceptos siguientes:

- 1).- Asignación de recursos del Ramo XXVI y XXXIII, al Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos (Programas Concertados con la Federación);
- 2).- Ministración de recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen al Estado, vía Ramo XXVI, para ejecutar sus programas normales en la entidad; y

3).- Aplicación directa de recursos que las dependencias de la Administración Pública Federal realicen con cargo a lo previsto en sus programas normales de alcance estatal.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos instrumenta su Programa de Inversión Pública Estatal, sobre la base de su proyecto de Ley de Ingresos y Egresos que anualmente debe aprobar el H. Congreso del Estado. Para la integración de éste Programa se atiende a las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 y las derivadas de los correspondientes Programas Sectoriales o Especiales.

A su vez los Ayuntamientos realizan la obra pública en base a la disponibilidad presupuestal que tengan, partiendo de la Ley de Ingresos y Egresos aprobada y de las obras comprometidas en su Plan Municipal de Desarrollo y Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

4. INSTRUMENTOS PARA LA CONCURRENCIA Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES E INVERSIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL.

Como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, la participación social es indispensable para lograr el bienestar colectivo; la participación social organizada en las ciudades es no sólo un método para mejorar la calidad de vida sino que coadyuvará a humanizar la vida urbana.

En este mismo sentido, el Plan Estatal de Desarrollo establece que es necesario promover inversiones en proyectos que tengan rendimientos crecientes compartidos e incidan en el desarrollo de un ser humano con más alternativas culturales, educativas y de capacitación ante los retos del próximo siglo.

En virtud de lo anterior se estimulará la inversión privada sin soslayar el beneficio social de la colectividad; en este sentido, como estrategia del Plan Estatal de Desarrollo la inversión privada desempeñará un papel preponderante como fuente de financiamiento, instrumentando esquemas de concesión.

El sector social desempeñará un papel importante en el proceso de operación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, para lo cual se establecerán convenios con los grupos organizados a fin de garantizar la viabilidad de los proyectos que se generen bajo un esquema de corresponsabilidad compartida.

Como parte de las propuestas del sector social, el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de contar con un foro en donde la ciudadanía tenga la oportunidad de exponer sus inconformidades en materia de la regulación y normatividad de los usos del suelo; además de participar formalmente en el proceso de seguimiento y evaluación de los diferentes programas de desarrollo urbano; dada la avanzada organización social que existe en la entidad podría establecerse lo que sería una Contraloría de Uso del Suelo.

Dentro del contexto de la participación de los sectores social y privado, el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano expresó la necesidad de contar con su Reglamento interno, que se convertiría en un instrumento más derivado del proceso de planeación.

Dentro de este apartado se incluye también la celebración de convenios con las asociaciones de colonos en materia de usos del suelo, que aunque son materia específica de los niveles inferiores de planeación, se pretende institucionalizar dicho procedimiento para oficializar su celebración.

5. INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano es el principal instrumento para la participación ciudadana que, prevista en la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, ha probado ser el conducto eficaz para que los sectores social y privado manifiesten sus inquietudes sobre el desarrollo de la entidad a la vez que se convierte en un foro abierto para la recepción de propuestas e inconformidades.

Del universo de acciones y propuestas derivadas del proceso de participación ciudadana cobra especial importancia la demanda hecha para crear una Contraloría de Usos y Destinos del Suelo; como cuerpo colegiado se concibe su operación en el seno del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano y por tanto conformada por representantes de la misma.

Su facultad específica será la de vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad que establecen los Programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, hacer los señalamientos necesarios ante las instancias correspondientes. La Contraloría de Usos y Destinos del Suelo estará integrada por representantes de los sectores social y privado tales como la Unión de Colonos, Unión de Colonias Populares, Asociaciones de Profesionistas, la Iniciativa Privada, Grupos de Inversionistas, Sector Obrero y el Sector Educativo. Su selección estará sujeta a lo que establezca el Acuerdo que oficialice su creación así como en su reglamento interno.

Cabe señalar que mediante Acuerdo del Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 2 de Octubre de 1996, se crea la Contraloría Social de Usos y Destinos del Suelo y en reunión de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano celebrada el 23 de Octubre de 1996, se nombro, de acuerdo al procedimiento establecido, al Presidente, Secretario y Primer vocal.

Otros instrumentos de participación ciudadana son:

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio y Subcomités Sectoriales.

Consejo de Desarrollo Municipal

Comités por obra determinada

Organizaciones vecinales

Juntas de vecinos

Promotores Voluntarios

Grupos cívicos

6. INSTRUMENTOS DERIVADOS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN.

El nivel instrumental se concibe como un proceso dinámico y permanente, por ello ésta parte supone únicamente la explicación de las vías principales de instrumentación detectadas durante el proceso de formulación del Programa. Con la elaboración y ejecución de los distintos programas, así como sus mecanismos de evaluación periódica, se darán nuevas orientaciones y correcciones a este nivel.

El proceso general de formulación del Programa de Desarrollo Urbano DE Centro de Población, se instituye con su aprobación, por lo que se requiere del decreto de aprobación emitido por el C. Gobernador del Estado; es conveniente anotar que el decreto es el instrumento medular al que deberán tender todas las acciones de los organismos públicos y privados de la entidad para el logro de los fines de ordenación y regulación urbana.

De igual manera los Acuerdos y Convenios derivados de la operación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, permitirán dar viabilidad a las líneas estratégicas propuestas.

Dentro de la etapa de operación, el sistema de seguimiento y evaluación que al efecto se establezca deberá garantizar una plena objetividad de los logros alcanzados y de los propios rezagos.

Para asegurar que las políticas y programas de gobierno se cumplan, deberá incidirse en la inversión pública a través de los diversos programas de desarrollo urbano, lo que se traducirá en obras y acciones de beneficio social; así mismo, se vigilará que los recursos autorizados se apliquen correcta y oportunamente en el tiempo y en el espacios programados, cuantificando metas y beneficios y su vinculación con la estrategia de desarrollo urbano y regional planteada en este Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población

El sistema de **seguimiento, control y evaluación** permitirá:

- Captar, oportuna y sistemáticamente la información referente a avances físicos y financieros de la obra pública;
- Identificar desviaciones y sus causas, aplicando, en su caso, las medidas correctivas necesarias;
- Contribuir a estrechar la coordinación entre dependencias, principalmente con las de los ayuntamientos;
- Apoyar al proceso de programación - presupuestación, ejecución y operación de las acciones emanadas del Programa estatal y municipal;
- Fomentar la participación de la comunidad en la ejecución, seguimiento y operación de los proyectos;
- Contribuir a la evaluación de resultados e impactos logrados;
- Medir el grado de control logrado en los usos y destinos del suelo.

Para el seguimiento y control se identifican cuatro fases principales:

1. Seguimiento y control programático y presupuestal.- Se establece la congruencia entre las acciones planeadas y las programadas con las diferentes fuentes de financiamiento.

2. Seguimiento y control físico - financiero.- Permite retroalimentar al proceso enunciado anteriormente, además de brindar elementos para cuantificar metas y beneficios.

3. Seguimiento y control de la operación.- Mecanismo que permite contar con información de las obras concluidas, aplicando, en su caso, medidas preventivas y correctivas para impedir su falta de operación.

4. Seguimiento y control en los usos y destinos del suelo.- Permite obtener indicadores para medir el grado de incidencia y eficacia en la regulación del crecimiento urbano; tal mecanismo requiere de una estrecha coordinación entre las diversas dependencias con competencia en la materia, implementando mecanismos de información permanentes.

Evaluación.

La evaluación es ubicada metodológicamente al final del proceso, aunque de hecho este presente en cada una de las etapas citadas anteriormente; su objetivo básico es retroalimentar al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, convirtiéndose en un proceso dinámico y oportuno.